

ANEXO AL OF. N° 4-5-A/143

CERTIFIED COPY

**CONVENCION PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE TERRORISMO
CONFIGURADOS EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSION
CONEXA CUANDO ESTOS TENGAN TRASCENDENCIA INTERNACIONAL**

**CONVENTION TO PREVENT AND PUNISH THE ACTS OF TERRORISM
TAKING THE FORM OF CRIMES AGAINST PERSONS AND RELATED
EXTORTION THAT ARE OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE**

**CONVENTION POUR LA PREVENTION OU LA REPRESSION
DES ACTES DE TERRORISME QUI PRENNENT LA FORME DE DELITS
CONTRE LES PERSONNES AINSI QUE DE L'EXTORSION CONNEXE A
CES DELITS LORSQUE DE TELS ACTES
ONT DES REPERCUSSIONS INTERNATIONALES**

**CONVENÇÃO PARA PREVENIR E PUNIR OS ATOS DE TERRORISMO
CONFIGURADOS EM DELITOS CONTRA AS PESSOAS E A EXTORSÃO CONEXA,
QUANDO TIVEREM ÊLES TRASCENDÊNCIA INTERNACIONAL**



**CONVENCION PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE TERRORISMO
CONFIGURADOS EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSION
CONEXA CUANDO ESTOS TENGAN TRASCENDENCIA INTERNACIONAL**

Suscrita en el Tercer Período Extraordinario de Sesiones
de la Asamblea General

**CONVENTION TO PREVENT AND PUNISH THE ACTS OF TERRORISM
TAKING THE FORM OF CRIMES AGAINST PERSONS AND RELATED
EXTORTION THAT ARE OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE**

Signed at the Third Special Session of the
General Assembly

**CONVENTION POUR LA PREVENTION OU LA REPRESSION
DES ACTES DE TERRORISME QUI PRENNENT LA FORME DE DELITS
CONTRE LES PERSONNES AINSI QU' DE L'EXTORSION CONNEXE A
CES DELITS LORSQUE DE TELS ACTES
ONT DES REPERCUSSIONS INTERNATIONALES**

Souscrite lors de la troisième Session extraordinaire de
l'Assemblée générale

**CONVENÇÃO PARA PREVENIR E PUNIR OS ATOS DE TERRORISMO
CONFIGURADOS EM DELITOS CONTRA AS PESSOAS E A EXTORSÃO CONEXA,
QUANDO TIVEREM ÊLES TRASCENDÊNCIA INTERNACIONAL**

Assinada no Terceiro Período Extraordinário de Sessões da
Assembléia Geral

CONVENCION PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE TERRORISMO
CONFIGURADOS EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSION
CONEXA CUANDO ESTOS TENGAN TRASCENDENCIA INTERNACIONAL

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

CONSIDERANDO:

Que la defensa de la libertad y de la justicia y el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana, reconocidos por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son deberes primordiales de los Estados;

Que la Asamblea General de la Organización, en la Resolución 4 del 30 de junio de 1970, condenó enérgicamente los actos de terrorismo y en especial el secuestro de personas y la extorsión conexa con éste, los que calificó como graves delitos comunes;

Que están ocurriendo con frecuencia actos delictivos contra personas que merecen protección especial de acuerdo con las normas del derecho internacional y que dichos actos revisten trascendencia internacional por las consecuencias que pueden derivarse para las relaciones entre los Estados;

Que es conveniente adoptar normas que desarrollen progresivamente el derecho internacional en lo que atañe a la cooperación internacional en la prevención y sanción de tales actos;

Que en la aplicación de dichas normas debe mantenerse la institución del asilo y que, igualmente, debe quedar a salvo el principio de no intervención,

HAN CONVENIDO EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES:

Artículo 1.

Los Estados contratantes se obligan a cooperar entre sí, tomando todas las medidas que consideren eficaces de acuerdo con sus respectivas legislaciones y especialmente las que se establecen en esta Convención, para prevenir y sancionar los actos de terrorismo y en especial el secuestro, el

homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional, así como la extorsión conexas con estos delitos.

Artículo 2

Para los efectos de esta Convención, se consideran delitos comunes de trascendencia internacional cualquiera que sea su móvil, el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional, así como la extorsión conexas con estos delitos.

Artículo 3

Las personas procesadas o sentenciadas por cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2 de esta Convención, estarán sujetas a extradición de acuerdo con las disposiciones de los tratados de extradición vigentes entre las partes o, en el caso de los Estados que no condicionan la extradición a la existencia de un tratado, de acuerdo con sus propias leyes.

En todo caso corresponde exclusivamente al Estado bajo cuya jurisdicción o protección se encuentren dichas personas calificar la naturaleza de los hechos y determinar si las normas de esta Convención les son aplicables.

Artículo 4

Toda persona privada de su libertad por aplicación de la presente Convención gozará de las garantías judiciales del debido proceso.

Artículo 5

Cuando no proceda la extradición solicitada por alguno de los delitos especificados en el artículo 2 porque la persona reclamada sea nacional o medie algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado a someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado requirente. En el juicio se cumplirá con la obligación que se establece en el artículo 4.

Artículo 6

Ninguna de las disposiciones de esta Convención será interpretada en el sentido de menoscabar el derecho de asilo.

Artículo 7

Los Estados contratantes se comprometen a incluir los delitos previstos en el artículo 2 de esta Convención entre los hechos punibles que dan lugar a extradición en todo tratado sobre la materia que en el futuro concierten entre ellos. Los Estados contratantes que no supediten la extradición al hecho de que exista un tratado con el Estado solicitante considerarán los delitos comprendidos en el artículo 2 de esta Convención como delitos que dan lugar a extradición, de conformidad con las condiciones que establezcan las leyes del Estado requerido.

Artículo 8

Con el fin de cooperar en la prevención y sanción de los delitos previstos en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados contratantes aceptan las siguientes obligaciones:

- (a) Tomar las medidas a su alcance, en armonía con sus propias leyes, para prevenir e impedir en sus respectivos territorios la preparación de los delitos mencionados en el artículo 2 y que vayan a ser ejecutados en el territorio de otro Estado contratante;
- (b) Intercambiar informaciones y considerar las medidas administrativas eficaces para la protección de las personas a que se refiere el artículo 2 de esta Convención;
- (c) Garantizar el más amplio derecho de defensa a toda persona privada de libertad por aplicación de la presente Convención;
- (d) Procurar que se incluyan en sus respectivas legislaciones penales los hechos delictivos materia de esta Convención cuando no estuvieren ya previstos en aquéllas;
- (e) Cumplimentar en la forma más expedita los exhortos en relación con los hechos delictivos previstos en esta Convención.

Artículo 9

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, así como de cualquier Estado Miembro de la Organización de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados vinculados a ella o que sea parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de cualquier otro Estado que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos invite a suscribirla.

Artículo 10

La presente Convención será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.

Artículo 11

El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, y dicha Secretaría enviará copias certificadas a los gobiernos signatarios para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y dicha Secretaría notificará tal depósito a los Gobiernos signatarios.

Artículo 12

La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen, en el orden en que depositen los instrumentos de sus respectivas ratificaciones.

Artículo 13

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados contratantes podrá denunciarla. La denuncia será transmitida a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, y dicha Secretaría la comunicará a los demás Estados contratantes. Transcurrido un año a partir de la denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados contratantes.

DECLARACION DE PANAMA

La Delegación de Panamá deja constancia de que nada en esta Convención podrá interpretarse en el sentido de que el derecho de asilo implica el de poderlo solicitar de las autoridades de los Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá, ni el reconocimiento de que el Gobierno de los Estados Unidos tiene derecho a dar asilo o refugio político en el territorio de la República de Panamá que constituye la Zona del Canal de Panamá.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, presentados sus plenos poderes, que han sido hallados en buena y debida forma, firman la presente Convención, en nombre de sus respectivos gobiernos, en la ciudad de Washington, el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno.

CONVENTION TO PREVENT AND PUNISH THE ACTS OF TERRORISM
TAKING THE FORM OF CRIMES AGAINST PERSONS AND RELATED
EXTORTION THAT ARE OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE

WHEREAS:

The defense of freedom and justice and respect for the fundamental rights of the individual that are recognized by the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the Universal Declaration of Human Rights are primary duties of states;

The General Assembly of the Organization, in Resolution 4, of June 30, 1970, strongly condemned acts of terrorism, especially the kidnapping of persons and extortion in connection with that crime, which it declared to be serious common crimes;

Criminal acts against persons entitled to special protection under international law are occurring frequently, and those acts are of international significance because of the consequences that may flow from them for relations among states;

It is advisable to adopt general standards that will progressively develop international law as regards cooperation in the prevention and punishment of such acts; and

In the application of those standards the institution of asylum should be maintained and, likewise the principle of nonintervention should not be impaired,

THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

HAVE AGREED UPON THE FOLLOWING ARTICLES:

Article 1

The contracting states undertake to cooperate among themselves by taking all the measures that they may consider effective, under their own laws, and especially those established in this convention, to prevent and punish acts of terrorism, especially kidnapping, murder, and other

assaults against the life or physical integrity of those persons to whom the state has the duty according to international law to give special protection, as well as extortion in connection with those crimes.

Article 2

For the purposes of this convention, kidnapping, murder, and other assaults against the life or personal integrity of those persons to whom the state has the duty to give special protection according to international law, as well as extortion in connection with those crimes, shall be considered common crimes of international significance, regardless of motive.

Article 3

Persons who have been charged or convicted for any of the crimes referred to in Article 2 of this convention shall be subject to extradition under the provisions of the extradition treaties in force between the parties or, in the case of states that do not make extradition dependent on the existence of a treaty, in accordance with their own laws.

In any case, it is the exclusive responsibility of the state under whose jurisdiction or protection such persons are located to determine the nature of the acts and decide whether the standards of this convention are applicable.

Article 4

Any person deprived of his freedom through the application of this convention shall enjoy the legal guarantees of due process.

Article 5

When extradition requested for one of the crimes specified in Article 2 is not in order because the person sought is a national of the requested state, or because of some other legal or constitutional impediment, that state is obliged to submit the case to its competent authorities for prosecution, as if the act had been committed in its territory. The decision of these authorities shall be communicated to the state that requested extradition. In such proceedings, the obligation established in Article 4 shall be respected.

Article 6

None of the provisions of this convention shall be interpreted so as to impair the right of asylum.

Article 7

The contracting states undertake to include the crimes referred to in Article 2 of this convention among the punishable acts giving rise to extradition in any treaty on the subject to which they agree among themselves in the future. The contracting states that do not subject extradition to the existence of a treaty with the requesting state shall consider the crimes referred to in Article 2 of this convention as crimes giving rise to extradition, according to the conditions established by the laws of the requested state.

Article 8

To cooperate in preventing and punishing the crimes contemplated in Article 2 of this convention, the contracting states accept the following obligations:

- a. To take all measures within their power, and in conformity with their own laws, to prevent and impede the preparation in their respective territories of the crimes mentioned in Article 2 that are to be carried out in the territory of another contracting state.
- b. To exchange information and consider effective administrative measures for the purpose of protecting the persons to whom Article 2 of this convention refers.
- c. To guarantee to every person deprived of his freedom through the application of this convention every right to defend himself.
- d. To endeavor to have the criminal acts contemplated in this convention included in their penal laws, if not already so included.
- e. To comply most expeditiously with the requests for extradition concerning the criminal acts contemplated in this convention.

Article 9

This convention shall remain open for signature by the member states of the Organization of American States, as well as by any other state that is a member of the United Nations or any of its specialized agencies, or any state that is a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other state that may be invited by the General Assembly of the Organization of American States to sign it.

Article 10

This convention shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional procedures.

Article 11

The original instrument of this convention, the English, French, Portuguese, and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited in the General Secretariat of the Organization of American States, which shall send certified copies to the signatory governments for purposes of ratification. The instruments of ratification shall be deposited in the General Secretariat of the Organization of American States, which shall notify the signatory governments of such deposit.

Article 12

This convention shall enter into force among the states that ratify it when they deposit their respective instruments of ratification.

Article 13

This convention shall remain in force indefinitely, but any of the contracting states may denounce it. The denunciation shall be transmitted to the General Secretariat of the Organization of American States, which shall notify the other contracting states thereof. One year following the denunciation, the convention shall cease to be in force for the denouncing state, but shall continue to be in force for the other contracting states.

STATEMENT OF PANAMA

The Delegation of Panama states for the record that nothing in this convention shall be interpreted to the effect that the right of asylum implies the right to request asylum from the United States authorities in the Panama Canal Zone, or that there is recognition of the right of the United States to grant asylum or political refuge in that part of the territory of the Republic of Panama that constitutes the Canal Zone.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, having presented their full powers, which have been found to be in due and proper form, sign this convention on behalf of their respective governments, at the city of Washington this second day of February of the year one thousand nine hundred seventy-one.

CONVENTION POUR LA PREVENTION OU LA REPRESSION
DES ACTES DE TERRORISME QUI PRENNENT LA FORME DE DELITS
CONTRE LES PERSONNES AINSI QUE DE L'EXTORSION CONNEXE A
CES DELITS LORSQUE DE TELS ACTES
ONT DES REPERCUSSIONS INTERNATIONALES

LES ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS,

CONSIDERANT:

Que la défense de la liberté et de la justice ainsi que le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, reconnus par la Déclaration américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme et par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme constituent des devoirs primordiaux des Etats.

Que dans sa Résolution 4 en date du 30 juin 1970, l'Assemblée générale de l'Organisation a énergiquement condamné les actes de terrorisme et, en particulier, le rapt des personnes et l'extorsion connexe à ce délit, qu'elle a qualifié de graves délits de droit commun;

Que se perpètrent avec fréquence des actes délictueux contre des personnes qui méritent une protection spéciale conformément aux normes du droit international et que ces actes prennent une importance internationale en raison des conséquences qui peuvent en résulter pour les relations entre Etats;

Qu'il est approprié d'adopter des normes qui assurent le développement du Droit international en ce qui a trait à la coopération entre Etats, à la prévention et à la sanction des actes susvisés, et

Que dans l'application des normes susdites l'on doit respecter l'institution de l'asile et maintenir intact le principe de la non-intervention,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Les Etats contractants s'obligent à coopérer entre eux en prenant dans le cadre de leurs législations respectives, et particulièrement dans le cadre des dispositions de la présente Convention toutes les mesures qu'ils

jugent efficaces pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment le rapt, l'homicide des personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'accorder une protection spéciale conformément au droit international, les attentats contre la vie et l'intégrité de ces personnes, ainsi que l'extorsion connexe aux délits ci-dessus visés.

Article 2

Aux effets de la présente Convention, sont considérés comme délits de droit commun ayant des répercussions internationales, quel qu'en soit le mobile, le rapt, l'homicide des personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'accorder une protection spéciale conformément au droit international, les attentats contre la vie et l'intégrité de ces personnes, ainsi que l'extorsion connexe aux délits susvisés.

Article 3

Les personnes poursuivies ou condamnées pour l'un quelconque des délits prévus à l'article 2 de la présente Convention, sont passibles d'extradition, conformément aux dispositions des traités d'extradition en vigueur entre les parties, ou conformément aux lois en vigueur dans les Etats où l'extradition n'est pas subordonnée à l'existence d'un traité.

Cependant, dans tous les cas, il appartient exclusivement à l'Etat dont la compétence s'étend auxdites personnes ou sous la protection duquel celles-ci se trouvent, de qualifier la nature des faits et de déterminer si les normes de la présente Convention leur sont applicables.

Article 4

Toute personne privée de sa liberté par suite de l'application de la présente Convention continue à jouir de son droit aux garanties de la procédure judiciaire appropriée.

Article 5

Lorsque l'extradition sollicitée en raison de l'un quelconque des délits visés à l'article 2 n'a pas été accordée parce que la personne qui fait l'objet de la demande est un ressortissant de l'Etat requis ou par suite de tout autre empêchement constitutionnel ou légal, l'Etat requis est obligé de porter le cas à la connaissance des autorités nationales compétentes pour les poursuites judiciaires, comme si le fait avait été commis sur son territoire. La décision prise par lesdites autorités sera communiquée à l'Etat requérant. Dans le procès la garantie établie à l'article précédent sera respectée.

Article 6

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée d'une façon pouvant porter atteinte au droit d'asile.

Article 7

Les Etats contractants s'engagent à inclure les délits prévus à l'article 2 de la présente Convention parmi les faits punissables, entraînant l'extradition, dans tous les traités relatifs à l'extradition qu'ils peuvent conclure entre eux à l'avenir. Dans leurs relations entre eux, les Etats contractants qui ne font pas dépendre l'extradition de l'existence d'un traité avec l'Etat requérant, considéreront les délits visés à l'article 2 de la présente Convention comme des délits entraînant l'extradition, conformément aux dispositions des lois de l'Etat requis.

Article 8

Afin de coopérer à la prévention et à la répression des délits visés à l'article 2 de la présente Convention, les Etats contractants acceptent les obligations suivantes:

- (a) Prendre toutes les mesures en leur pouvoir, conformément à leurs lois, afin de prévenir et d'empêcher la préparation sur leur territoire des délits visés à l'article 2 et destinés à être commis sur le territoire d'un autre Etat contractant;
- (b) Echanger des informations et envisager les mesures administratives efficaces permettant de protéger les personnes visées à l'article 2 de la présente Convention;
- (c) Garantir le droit le plus étendu à la défense à toute personne privée de sa liberté par suite de l'application de la présente Convention;
- (d) Prévoir dans leurs législations pénales respectives les faits délictueux visés dans la présente Convention lorsqu'ils ne figurent pas déjà dans ces législations;
- (e) Exécuter avec célérité les commissions rogatoires relatives aux faits délictueux prévus dans la présente Convention.

Article 9

La présente Convention demeure ouverte à la signature des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains, ainsi qu'à celle de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées de celle-ci, ou qui soit Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout Etat invité à la souscrire par l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains.

Article 10

La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 11

L'original, dont les versions espagnole, française, anglaise et portugaise font également foi, sera déposé au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, lequel en enverra des copies certifiées aux gouvernements signataires aux fins de ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat général de l'OEA qui informera les gouvernements signataires de ce dépôt.

Article 12

La présente Convention entrera en vigueur entre les Etats qui l'auront ratifiée dans l'ordre dans lequel ils auront déposé leurs instruments de ratification respectifs.

Article 13

La présente Convention restera en vigueur indéfiniment mais n'importe quel Etat contractant peut la dénoncer. La dénonciation sera notifiée au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, lequel la communiquera aux autres Etats contractants. Passé un délai d'une année à partir de la dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'Etat qui l'aura dénoncée.

DECLARATION DU PANAMA

La Délégation du Panama demande que soit pris acte du fait que rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme impliquant que le droit d'asile sous-entend celui de pouvoir le solliciter des autorités des Etats-Unis dans la Zone du Canal de Panama, ni que le gouvernement des Etats-Unis a le droit d'accorder asile ou refuge politique dans le territoire de la République du Panama que constitue la Zone du Canal de Panama.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, signent la présente Convention au nom de leurs gouvernements dans la ville de Washington, D.C., le deux février mil neuf cent soixante et onze.

CONVENÇÃO PARA PREVENIR E PUNIR OS ATOS DE TERRORISMO
CONFIGURADOS EM DELITOS CONTRA AS PESSOAS E A EXTORSÃO CONEXA,
QUANDO TIVEREM ÊLES TRANSCENDÊNCIA INTERNACIONAL

OS ESTADOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS,

CONSIDERANDO:

Que a defesa da liberdade e da justiça e o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, reconhecidos pela Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, são deveres primordiais dos Estados;

Que a Assembléia Geral da Organização, na Resolução 4 de 30 de junho de 1970, condenou enérgicamente os atos de terrorismo e, em especial, o seqüestro de pessoas e a extorsão com êste conexas, qualificando-os de graves delitos comuns;

Que vêm ocorrendo com freqüência atos delituosos contra pessoas que merecem proteção especial de acordo com as normas do direito internacional e que tais atos revestem transcendência internacional devido às consequências que podem advir para as relações entre os Estados;

Que é conveniente adotar normas que desenvolvam progressivamente o direito internacional no tocante à cooperação internacional na prevenção e punição de tais atos;

Que na aplicação das referidas normas deve manter-se a instituição do asilo e que deve também ficar a salvo o princípio da não intervenção,

CONTEM NOS SEGUINTE ARTIGOS:

Artigo 1

Os Estados contratantes obrigam-se a cooperar entre si, tomando todas as medidas que considerem eficazes de acordo com suas respectivas legislações e, especialmente, as que são estabelecidas nesta Convenção, para prevenir e punir os atos de terrorismo e, em especial, o seqüestro, o homicídio e outros atentados contra a vida e a integridade das pessoas a quem o Estado tem o dever de proporcionar proteção especial conforme o direito internacional, bem como a extorsão conexa com tais delitos.

Artigo 2

Para os fins desta Convenção, consideram-se delitos comuns de transcendência internacional, qualquer que seja o seu móvel, o seqüestro, o homicídio e outros atentados contra a vida e a integridade das pessoas a quem o Estado tem o dever de proporcionar proteção especial conforme o direito internacional, bem como a extorsão conexa com tais delitos.

Artigo 3

As pessoas processadas ou condenadas por qualquer dos delitos previstos no artigo 2 desta Convenção estarão sujeitas a extradição de acordo com as disposições dos tratados de extradição vigentes entre as partes ou, no caso dos Estados que não condicionam a extradição à existência de tratado, de acordo com suas próprias leis.

Em todos os casos compete exclusivamente ao Estado sob cuja jurisdição ou proteção se encontrarem tais pessoas qualificar a natureza dos atos e determinar se lhes são aplicáveis as normas desta Convenção.

Artigo 4

Toda pessoa privada de sua liberdade em virtude de aplicação desta Convenção gozará das garantias judiciais de processo regular.

Artigo 5

Quando não proceder a extradição solicitada por algum dos delitos especificados no artigo 2 em virtude de ser nacional a pessoa reclamada ou mediar algum outro impedimento constitucional ou legal, o Estado requerido ficará obrigado a submeter o caso ao conhecimento das autoridades competentes, para fins de processo como se o ato houvesse sido cometido em seu território. A decisão que adotarem as referidas autoridades será comunicada ao Estado requerente. Cumprir-se-á no processo a obrigação que se estabelece no artigo 4.

Artigo 6

Nenhuma das disposições desta Convenção será interpretada no sentido de prejudicar o direito de asilo.

Artigo 7

Os Estados contratantes comprometem-se a incluir os delitos previstos no artigo 2 desta Convenção entre os atos puníveis que dêo lugar a extradição em todo tratado sobre a matéria que no futuro celebrarem entre si. Os Estados contratantes que não subordinem a extradição ao fato de que exista tratado com o Estado requerente considerarão os delitos compreendidos no artigo 2 desta Convenção como delitos que dêo lugar a extradição, em conformidade com as condições que estabeleçam as leis do Estado requerido.

Artigo 8

Com o fim de cooperar na prevenção e punição dos delitos previstos no artigo 2 desta Convenção, os Estados contratantes aceitam as seguintes obrigações:

a) tomar as medidas a seu alcance, em harmonia com suas próprias leis, para prevenir e impedir em seus respectivos territórios a preparação dos delitos mencionados no artigo 2 e que forem ser executados no território de outro Estado contratante;

b) intercambiar informações e considerar medidas administrativas eficazes para a proteção das pessoas a que se refere o artigo 2 desta Convenção;

c) garantir o mais amplo direito de defesa a toda pessoa privada da liberdade em virtude de aplicação desta Convenção;

d) procurar que sejam incluídos em suas respectivas legislações penais os atos delituosos matéria desta Convenção, quando já não estiverem nelas previstos;

e) dar cumprimento da forma mais expedita às rogatórias com relação aos atos delituosos previstos nesta Convenção.

Artigo 9

Esta Convenção fica aberta à assinatura dos Estados Membros da Organização dos Estados Americanos, bem como à de qualquer Estado Membro da Organização das Nações Unidas ou de qualquer dos organismos especializados a ela vinculados, ou que seja parte no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e à de qualquer outro Estado que fôr convidado pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos a assiná-la.

Artigo 10

Esta Convenção será ratificada pelos Estados signatários, de acôrdo com suas respectivas normas constitucionais.

Artigo 11

O instrumento original, cujos textos em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, e a referida Secretaria enviará cópias autenticadas aos Governos signatários para fins da respectiva ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e a referida Secretaria notificará tal depósito aos Governos signatários.

Artigo 12

Esta Convenção entrará em vigor entre os Estados que a ratificarem, na ordem em que depositarem os instrumentos de suas respectivas ratificações.

Artigo 13

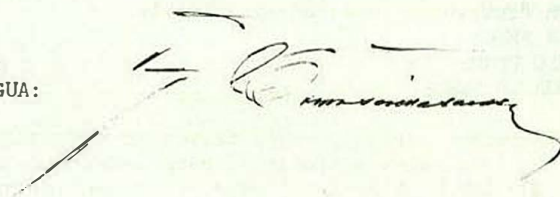
Esta Convenção vigorará indefinidamente, mas poderá ser denunciada por qualquer dos Estados contratantes. A denúncia será encaminhada à Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e a referida Secretaria a comunicará aos demais Estados contratantes. Transcorrido um ano a partir da denúncia, cessarão para o Estado denunciante os efeitos da Convenção, ficando ela subsistente para os demais Estados contratantes.

DECLARAÇÃO DO PANAMÁ

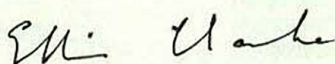
A Delegação do Panamá deixa consignado que nada nesta Convenção poderá ser interpretado no sentido de que o direito de asilo implica o de poder solicitá-lo às autoridades dos Estados Unidos da América na Zona do Canal do Panamá, nem o reconhecimento de que o Governo dos Estados Unidos tem direito de conceder asilo ou refúgio político no território da República do Panamá que constitui a Zona do Canal do Panamá.

EM FÉ DO QUE, os Plenipotenciários infra-assinados, apresentados os seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, assinam esta Convenção em nome dos seus respectivos Governos, na cidade de Washington, D.C., no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e um.

POR NICARAGUA:
FOR NICARAGUA:
PELA NICARÁGUA:
POUR LE NICARAGUA:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. R. ...', with a long, sweeping underline.

POR TRINIDAD Y TOBAGO:
FOR TRINIDAD AND TOBAGO:
POR TRINIDAD E TOBAGO:
POUR TRINITE ET TOBAGO:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'E. H. ...', with a long, sweeping underline.

POR PERU:
FOR PERU:
PELO PERU:
POUR LE PERU:

POR HONDURAS:
FOR HONDURAS:
POR HONDURAS:
POUR LE HONDURAS:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Ramon S. ...', written in a cursive style.

POR GUATEMALA:
FOR GUATEMALA:
PELA GUATEMALA:
POUR LE GUATEMALA:

POR URUGUAY:
FOR URUGUAY:
PELO URUGUAI:
POUR L'URUGUAY:

Joaquin Butera

POR BOLIVIA:
FOR BOLIVIA:
PELA BOLIVIA:
POUR LA BOLIVIE:

POR ECUADOR:
FOR ECUADOR:
PELO ECUADOR:
POUR L'EQUATEUR:

POR CHILE:
FOR CHILE:
PELO CHILE:
POUR LE CHILI:

POR BARBADOS:
FOR BARBADOS:
POR BARBADOS:
POUR LA BARBADE:

POR MEXICO:
FOR MEXICO:
PELO MEXICO:
POUR LE MEXIQUE:

Quilis S. Rabasa

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:
PELOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA:
POUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE:

John S. Smith II
Charles H. Meyer
Frederick S. Smith
Mabel B. Feldman

[Handwritten signature]

A collection of handwritten marks on a document. At the top left, the text "A:" is visible. The main body of the page is filled with large, stylized, and somewhat illegible handwritten signatures and scribbles. One signature appears to start with "R. J. Fanc". Below it, there are more scribbles and a signature that looks like "M. Achelo". At the bottom, there is a large, sweeping signature that appears to be "M. Achelo" again, followed by a long horizontal line and a double vertical line.

POR BRASIL:
FOR BRAZIL:
PELO BRASIL:
POUR LE BRESIL:

POR HAITI:
FOR HAITI:
PELO HAITI:
POUR HAITI:

POR PARAGUAY:
FOR PARAGUAY:
PELO PARAGUAI:
POUR LE PARAGUAY:

POR LA REPUBLICA DOMINICANA:
FOR THE DOMINICAN REPUBLIC:
PELA REPÚBLICA DOMINICANA:
POUR LA REPUBLIQUE DOMICAINE:

Quinto del. Fernando?
E. A. V. S.
mar de la

POR VENEZUELA:
FOR VENEZUELA:
PELA VENEZUELA:
POUR LE VENEZUELA:

Ante
Wm. W. W. W.
W. W. W.
C. P. Agudo
W. W. W.

POR EL SALVADOR:
FOR EL SALVADOR:
POR EL SALVADOR:
POUR LE SALVADOR:

W. W. W.
W. W. W.

POR COLOMBIA:
FOR COLOMBIA:
PELA COLOMBIA:
POUR LA COLOMBIE:

Manuel
Cabrera
Alfonso
José Amador

POR LA REPUBLICA ARGENTINA:
FOR THE ARGENTINE REPUBLIC:
PELA REPÚBLICA ARGENTINA:
POUR LA REPUBLIQUE ARGENTINE:

POR JAMAICA:
FOR JAMAICA:
PELA JAMAICA:
POUR LA JAMAÏQUE:

Richardson

Certifico que el documento preinserto es copia fiel y exacta de los textos originales en español, inglés, francés y portugués de la "Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional", y que los textos firmados de dichos originales se encuentran depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

10 de febrero de 1971

I hereby certify that the foregoing document is a true and faithful copy of the authentic texts in English, French, Portuguese and Spanish of the "Convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes against persons and related extortion that are of international significance", and that the signed originals of these texts are on deposit with the General Secretariat of the Organization of American States.

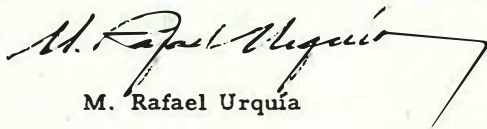
February 10, 1971

Je certifie que le document qui précède est une copie fidèle et conforme aux textes authentiques en anglais, espagnol, français et portugais de la "Convention pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi que de l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales", et que les originaux signés de ces textes se trouvent déposés au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

10 février 1971

Certifico que o documento transcrito é cópia fiel e autêntica dos textos originais em espanhol, francês, inglês e português da "Convenção para prevenir e punir os atos de terrorismo configurados em delitos contra as pessoas e a extorsão conexa, quando tiverem êles transcendência internacional", e que os textos assinados de ditos originais encontram-se depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

10 de fevereiro de 1971


M. Rafael Urquía

Secretario General Adjunto
de la Organización de los
Estados Americanos

Assistant Secretary General
of the Organization of
American States

Secrétaire général adjoint
de l'Organisation des
Etats Américains

Secretário-Geral Adjunto
da Organização dos
Estados Americanos



341.2-SEPF-7960

\$0.50